DOS MINUTOS DE DOCTRINA

12 de febrero de 2019

PADRES ANCIANOS, HIJOS PELEADOS

Una cosa es apelar una medida judicial; otra muy distinta es pedir que se la levante.

La vida de la familia Pérez era un infierno.

Los padres, Daniel y Daniela —vamos a simplificar la nomenclatura en beneficio de la claridad— estaban ya ancianos y enfermos. Tenían dos hijas: María casada con José y Ana con Luis.

María y José detestaban a Ana y a Luis y éstos dos a los primeros. Ni las hermanas ni los dos concuñados se toleraban entre sí.

La raíz del problema parecía ser que “las dos parejas [...] se reclamaban la participación de los otros en el cuidado de los dos progenitores ancianos”.

El nivel de violencia (y, según María, el nivel de peligrosidad de su cuñado) llegó a tal extremo que a María se le ocurrió pedir a la justicia de familia una *medida de protección*, bajo la cual se le prohibió a Luis acercarse a su cuñada.

Pero resulta que Daniel y Daniela vivían con María y José. Y por razones que ignoramos los dos ancianos debían trasladarse periódicamente al domicilio de Ana y Luis “para obtener la ayuda necesaria con todo el inconveniente que esto originaba”.

No cuesta mucho imaginarse que recibir o despedir a los viejitos y al mismo tiempo mantenerse alejado de su cuñada constituía un problema para Luis. Ocuparse de los suegros manteniendo en todo momento una distancia higiénica con su cuñada le resultaba intolerable. Además, cualquier conversación al respecto debe haber dado lugar a nutridos intercambios de todo tipo de calificativos.

Lo cierto es que Luis pidió al juzgado que se levantara la medida de protección. Acompañó como prueba en apoyo de su pedido una pericia psicológica. El juzgado aceptó el pedido y levantó la medida. Según el juez, “ya no existía violencia entre las partes” y si bien existía “disfuncionalidad crónica en el sistema familiar en los modos de comunicación e interacción”, Daniel y Daniela “necesitaban de la ayuda de sus dos yernos”.

Además, si Luis volvía a “mostrar conductas violentas” hacia María, siempre se podían dictar nuevas medidas de protección.

Pero los Pérez no estaban preparados para la paz (o María no quería correr riesgos) y entonces apeló.

Su principal argumento fue (dicho en lenguaje tribunalicio) que Luis “no había modificado la conducta agresiva denunciada”. Seguramente podría haberlo dicho en términos más llanos: “Luis seguía siendo el mismo loco de siempre”.

María dijo también que “no se había probado ningún cambio [como] para dejar sin efecto la medida”. Y si bien la pericia decía que Luis “no presentaba un cuadro violento”, María sostuvo que su querido cuñado tenía “una conducta impulsiva y peligrosa” y que un contexto disfuncional claramente la agravaba. Y señaló también que Luis no demostró “haber realizado un tratamiento psicológico que demostrara de manera concluyente que se sometió a terapia y que ésta obtuvo el objetivo buscado”.

En su defensa, el bueno de Luis dijo que, básicamente, la loca era su cuñada.

La Cámara de Apelaciones de Familia de Mendoza resolvió la cuestión¹. Primero dijo que como Luis no había apelado la medida de protección, eso implicó “su reconocimiento de la procedencia de los supuestos que justificaron su dictado, es decir, de la existencia de violencia ejercida sobre los sujetos protegidos por ellas”. En nuestra opinión, no haber apelado constituyó un grave error estratégico.

Técnicamente, Luis pidió *el levantamiento* de la medida, *que no es lo mismo*.

Eso porque “para obtener el cese de las medidas tutelares, [Luis debió] acreditar que habían cesado las causales por las que fueron adoptadas: que se revirtió la

situación de peligro o riesgo para la vida o la salud física o psíquica de las víctimas”.

Explicando las cosas de otro modo, la misma Cámara dijo que una cosa era *apelar una medida tutelar* y otra, muy distinta, *pedir que esa medida cese o sea levantada*.

En efecto, una apelación “tiene a obtener en la segunda instancia la revocación de lo decidido por el juez [de primera instancia]” y que por lo tanto se deniegue una medida porque “al momento en que fue otorgada no se configuraban los presupuestos necesarios para su concesión”.

Dicho en términos casi vulgares, una apelación, en un caso como éste, consistiría en convencer a la Cámara de que por error se dictó una medida de protección “porque Luis estaba loco”, cuando en realidad *estaba cuerdo*.

Un pedido de *cese o levantamiento* de una medida tutelar exige, en cambio, que “el interesado acredite el cambio de las circunstancias fácticas que motivaron su otorgamiento”.

Otra vez, en lenguaje casi vulgar: “Vean, señores jueces, me prohibieron acercarme a mi cuñada porque yo estaba loco, pero me curé: ahora estoy cuerdo”.

En su jerga tribunalicia, los jueces opinaron que Luis no probó “que se hubiera modificado el contexto fáctico que justificó el dictado de la medida de protección a favor de [su cuñada] ni, por lo tanto, que hubiera *cesado* la causal por la que esa medida fue adoptada”.

Para la Cámara, “lo que se debió probar era que se había modificado la situación de violencia que justificó el despacho protectivo, lo cual no había ocurrido”.

¹ In re “G. c. S”, CApFam, 1ª Circunscripción, Mendoza, 11 de septiembre 2017; expte 1476/15/11-F350/17; *elDial.com* AAA603, 30 enero 2018.

Y los magistrados estuvieron de acuerdo en que “existían razones suficientes” para que en su momento se hubiera dictado la medida de protección.

Según resultaba de la prueba, la pobre Daniela había declarado que ella nunca había presenciado una situación de violencia entre su hija María y su yerno Luis, pero que la situación entre ellos no era buena. Ana, la mujer de Luis, dijo que su marido no era una persona violenta, pero que se llevaba mal con José y que María (su propia hermana) “era una fabuladora”. Otro testigo dijo que Luis “era pegador”.

Semejante disparidad de opiniones llevó a los jueces a concluir que “los testimonios se neutralizaban entre sí, no resultaban convincentes en uno u otro sentido, por lo que no podía entenderse por probado con ellos el cese de la situación de violencia generada entre las partes”.

Pero además, la pericia psiquiátrica hecha a Luis indicaba “que al momento de la evaluación no representaba un peligro para sí o para terceros, *pero esto es porque no se encuentra enajenado*” [sic]. ¿Es un chiste? A ver si entendemos: ¿el personaje no está loco excepto “cuando se pone loco”? Nuestros conocimientos de psiquiatría son escasos, pero no creemos que sea necesario contratar a un psiquiatra para llegar a una conclusión semejante.

El dictamen también decía que “no surgía que [Luis] presentara un carácter violento”, pero “sí se observan rasgos de impulsividad

que frente a situaciones de estrés puede hacer que presente conductas impulsivas”, todo ello en un contexto de “conflictos no resueltos” y “disfuncionalidad familiar crónica en los modos de comunicación e interacción que representaba potencial para la emergencia de situaciones de violencia”.

La Cámara encontró razonable la medida de protección porque “cuando las discusiones familiares además de generar un patrón comunicacional disfuncional y conflictivo, que puede incluso haberse desencadenado por responsabilidad de ambas partes, escala a la existencia de amenazas y agresiones verbales, *se justifica la adopción de medidas en protección del sujeto más vulnerable para cortar el ciclo de violencia impidiendo la concreción de daños irreparables*”.

Para los jueces, Luis “no probó que se hubiera superado la disfunción familiar existente con su cuñada, independientemente de la que también existiría con su conuñado”.

Para colmo de males, en una visita que hizo la policía a la casa de Luis, éste recibió a los agentes “ofuscado y propinando amenazas”.

Por todo lo cual, la Cámara decidió mantener la medida en su lugar. Y, para colmo, obligó a Luis a pagar las costas. Quizás algún día nos enteremos de cuán mal terminó esta historia.

* * *

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para más información sobre este tema pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electrónico a np@negri.com.ar.

**Este artículo es un servicio de Negri & Pueyrredon Abogados a sus clientes y amigos.
No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sobre tema alguno.**